

Neoliberalismo en Honduras: breve reseña (1980-2015)¹

Neoliberalism in Honduras: a brief overview (1980-2015)

Neoliberalismo em Honduras: breve revisão (1980-2015)

MTRA. ANDREA AMPARO ABARCA OROZCO

LIC. OSCAR CÓRDOBA MASCALI

MTRA. BERENICE RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

Resumen: Honduras es un país centroamericano que a lo largo de su historia ha luchado —y lo sigue haciendo— por lograr una mayor independencia de los poderes estructurales externos. Sus resultados han sido disímiles y las narraciones y/o documentaciones de sus experiencias son escasas, o al menos, insuficientes. Por ello, la contribución de este trabajo va en dos sentidos: 1) documentar algunos hechos de su historia económica de los últimos años y 2) explicar los cambios en sus estructuras sociales, políticas y económicas inducidas por prácticas neoliberales durante el periodo de 1980 a 2015. Con estas dos vertientes de análisis, se podrá notar cómo la nación ha cursado por varios regímenes: del liberal a la ‘república bananera’, del Estado desarrollista civil a los gobiernos cívicos militares hasta llegar al neoliberalismo, los cuales generaron cambios en sus estructuras económicas y sociales.

Palabras clave: privatización, capitalismo, economía, conflictos sociales y políticos, violencia estructural, desigualdad.

Abstract: Honduras is a Central American country that throughout its history has struggled —and continues to struggle— to achieve greater independence from external structural powers. Its results have been dissimilar and the narratives and/or documentation of its experiences are scarce, or at least insufficient. Therefore, the contribution of this paper is of two ways: 1) to document some facts of its recent economic history and 2) to explain the changes in its social, political and economic structures induced by neoliberal practices during the 1980 to 2015. With these two aspects of analysis, it will be possible to note how the nation has gone through several regimes: from the liberal to the ‘banana republic’, from the civilian developmentalist state to the civic-military governments until reaching neoliberalism, which generated changes in its economic and social structures.

Keywords: privatization, capitalism, economy, social and politics conflicts, structural violence, inequality.

Resumo: Honduras é um país centro-americano que ao longo de sua história tem lutado – e continua lutando – para alcançar uma maior independência dos poderes estruturais externos. Seus resultados têm sido desiguais, e as narrativas e/ou documentações de suas experiências são escassas, ou pelo menos insuficientes. Por isso, a contribuição deste trabalho segue dois sentidos: 1) documentar alguns fatos de sua história econômica nos últimos anos e 2) explicar as mudanças em suas estruturas sociais, políticas e econômicas, induzidas por práticas neoliberais durante o período de 1980 a 2015. Com essas duas vertentes de análise, pode-se notar como a nação passou por vários regimes: do liberal

¹ Texto académico dedicado a la memoria de la Dra. Diana Margarita Favela Gavía, ex miembro del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos motivó a escribir este artículo siendo sus alumnos en el curso de Problemas teóricos y metodológicos del análisis político y social en América Latina.

à 'república bananeira', do Estado desenvolvimentista civil aos governos cívico-militares, até chegar ao neoliberalismo, os quais geraram mudanças em suas estruturas econômicas e sociais.

Palavras-chave: privatização, capitalismo, economia, conflitos sociais e políticos, violência estrutural, desigualdade.

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

Este artículo utiliza un enfoque metodológico mixto, combinando análisis cualitativo y cuantitativo, para examinar el impacto del neoliberalismo en Honduras desde 1980 hasta el 2015. El análisis plantea un recorrido histórico del país basado en información y datos provenientes de organismos internacionales como el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), principalmente. El texto se divide en dos bloques: el primero expone la experiencia neoliberal de Honduras desde una perspectiva política y social, cuya transición comenzó con la desmilitarización del país, las privatizaciones y la modificación de leyes. El segundo, aborda la reestructuración económica en el contexto de la globalización neoliberal, para explicar la aplicación de las reformas estructurales que beneficiaron al capital extranjero. Asimismo, como consecuencia de ello, se estudia el tema del empleo y el desempleo y de cómo la población económicamente activa se ciñó a estos cambios, los cuales se vieron reflejados en la variación del Producto Interno Bruto (PIB). Finalmente, como elemento importante, producto de estas transformaciones, se repasa el desfinanciamiento o clausura de las instituciones estatales y la privatización de empresas públicas.

1. Honduras bajo la lógica neoliberal: contexto político y social

El neoliberalismo constituye hasta el día de hoy un proceso polisémico de sendos análisis teóricos y políticos. A más de dos décadas de que América Latina transitara de la industrialización de sustitución de importaciones y el intervencionismo estatal a la doctrina neoliberal centrada en la libertad económica y la competencia, los resultados y las consecuencias se han materializado de diferentes maneras según el contexto. Hay una línea que vincula al neoliberalismo con las reformas y ajustes estructurales diseñadas y pensadas para América Latina en 1989, con el Consenso de Washington, proceso que fue el parteaguas para que la región iniciara la transición hacia un nuevo modelo económico abierto y liberalizado (Bustelo, 2003, p. 745). Michel Foucault define el neoliberalismo como un dispositivo de dominación biopolítico, es decir,

una nueva tecnología de poder que busca controlar la dimensión política, económica y los espacios más íntimos de la vida, en donde el papel del Estado es medular para vigilar que el mercado funcione (Foucault, 2009, pp. 28-29). Autores como Daniel García y Maristella Svampa, señalan que se trata de un patrón de acumulación del capital que redefine las relaciones entre el Estado (García, 1994, p. 13) y un proceso de redistribución asimétrico que acentúa las desigualdades y la emergencia de nuevas brechas políticas (Svampa, 2013, p. 32). Para otros intelectuales, simplemente es el capitalismo caracterizado por un periodo de exacerbación cuantitativa y cualitativa de la acumulación incesante del capital (Puello-Socarrás, 2015, p. 22) o una ideología de la era global que recorre el mundo y no deja, aparentemente, espacios para ninguna otra forma de pensamiento (Sosa, 2012, p. 58).

Para abordar dicho fenómeno en este trabajo, entendemos que el neoliberalismo es una teoría de prácticas políticas-económicas que descansan en la fuerza coercitiva de la competencia, para impulsar nuevas formas de producción. Además, se asienta en la premisa de que la mejor manera del desarrollo humano es no restringir las libertades empresariales del individuo en un marco institucional que garantice los derechos de propiedad privada y el libre mercado (Harvey, 2007, pp. 6-7). Así, el surgimiento del neoliberalismo se podría ubicar en la década del setenta en un contexto de desempleo e inflación a nivel internacional, originando un enorme descontento social. Los movimientos obreros, en gran parte del mundo capitalista, buscaron una alternativa socialista: “Esto planteaba por doquier una clara amenaza política a las elites económicas y a las clases dominantes, tanto en los países del capitalismo avanzado (Italia, Francia, España, y Portugal) como en muchos países en vías de desarrollo (Chile, México y Argentina) [...] El golpe de estado de Chile y la toma del poder por los militares en Argentina, promovidos internamente por las clases altas con el apoyo de Estados Unidos, proporcionaba un amago de solución” (Harvey, 2007, p. 20).

En las fases iniciales, el neoliberalismo promovió fuertes cambios en las estructuras sociales y estatales. El modelo económico impulsó la ruptura o reencauzamiento de cualquier tipo de solidaridad social. De este modo, la denominada flexibilización laboral fue *grosso modo*, la pérdida de los derechos de los trabajadores, en tanto que se los consideraba individualmente. Para ello, fue necesario también un cambio en las formas del Estado. A este respecto, David Harvey apunta: “con el objeto de hacerlo más funcional a sus propios intereses (intereses neoliberales), producen una reconfiguración radical de las instituciones y de las prácticas estatales (en particular respecto al equilibrio entre la coerción y el consentimiento, entre el poder del capital y de los movimientos populares, y entre el poder ejecutivo y judicial, por un lado, y los poderes de la democracia representativa por otro)” (2007, p. 85). Esto

quiere decir que, siguiendo el argumento de Harvey, la libertad bajo este sistema es concebida —o reducida— en torno a la liberación de empresas y a la expansión del mercado, lo que de alguna manera deviene en la mercantilización de todo lo existente provocando un enorme vacío en el orden social. De esta manera, el neoliberalismo instaura un sistema de reformas política-económicas, y la consiguiente y necesaria globalización, brinda herramientas para interconectar a las naciones a gran escala, por medio de la tecnología, la cultura, la política y lo social (Castells, 2000, pp. 47, 168, 176).

La lógica del Estado neoliberal beneficia la propiedad privada, la ley es sobrepuesta y se prioriza la libertad de comercio, pues tiene la obligación de proteger las garantías individuales para que los sujetos se muevan con seguridad en el mercado. Así, entonces, el complejo empresarial o la iniciativa privada se convierten en la fuente de riqueza e innovación. Por ende, se cree que bajo los preceptos neoliberales se podría eliminar la pobreza y la desigualdad con la apertura de dichos mercados hacia el exterior (Harvey, 2007, p. 6), pero en la práctica, estas propuestas fueron inclementes. Un ejemplo de ello es Honduras, un territorio cuya economía está restringida a pocos productos de exportación y signada por la corrupción, la violencia y un crecimiento del PIB ralentizado. El país fue condicionado con la asignación de créditos, así como a la ayuda externa por parte del FMI. Esto provocó el desmantelamiento de la iniciativa pública y una desregulación financiera. Los líderes neoliberales sostuvieron que los países en vías de desarrollo vivían una endeble circunstancia porque no distribuían adecuadamente sus recursos, la fijación de precios era incorrecta y la intervención del Estado era excesiva (Serna, 2016, p. 7).

1.1 Un país en conflicto

Después de la independencia de Honduras alcanzada en 1821, la trama política y social estuvo enmarcada dentro de las luchas entre conservadores y liberales, la intervención extranjera y la participación activa de los militares en la política nacional (Arancibia, 1984, pp. 25-26). A partir de ese momento, se trazó y reforzó, en términos de desigualdad, la economía hondureña basada en la concesión de tierras para la producción del plátano. Así, durante el siglo XX, la producción y la exportación del fruto fue la base de la economía caracterizándose por la mano de obra barata y el dominio empresarial internacional; asimismo, se llevó a cabo la alianza con las cúpulas militares y las élites civiles, cuyos poderes controlaron el país con dictaduras y golpes de Estado. A mediados del mismo siglo, los conflictos armados y las luchas de liberación de la región —El Salvador, Nicaragua y Guatemala— en

el contexto de la Guerra Fría y la polarización de los ejes ideológicos (capitalismo y socialismo), permitieron a Honduras reforzar la alianza y la legitimación de la intervención estadounidense, puesto que el objetivo era aniquilar la guerrilla en El Salvador y desestabilizar el gobierno de Nicaragua (Romero, 2010, pp. 31-39). En este sentido, los sectores dominantes hicieron todo lo posible para ocultar que en Honduras acontecían conflictos políticos, pero hubo elementos contundentes que no pasaron desapercibidos, como por ejemplo, el movimiento obrero hondureño que inició su lucha en la década de los veinte —cuyo alcance más importante fue en los cincuenta—, ya que lo integrantes lograron consolidar derechos sociales para los trabajadores de las compañías bananeras, a través de la presión organizativa gremial (Martínez, 2010, p. 53). Gran parte de este movimiento se inspiró en la ideología marxista, la cual ayudó a la reorganización del Partido Comunista y al asentamiento de grupos guerrilleros a finales de los setenta, como la Unión Revolucionaria del Pueblo (URP), Movimiento Popular de Liberación Cinchonero (MPL-C), Fuerzas Populares Revolucionarias “Lorenzo Zelaya” (FPR-LZ) y Frente Morazanista para la Liberación de Honduras (FMLH), entre otros (Canizales, 2008, pp. 111-112).

En este contexto, en medio de una crisis centroamericana derivada de la Revolución Popular Sandinista, el surgimiento de grupos subversivos, como los hondureños (anteriormente mencionados), se dio en un escenario de transición de gobiernos militares a civiles, con el propósito de denunciar que las elecciones seguían supeditadas a los intereses militares, así como la condenación de los ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras en alianza con Estados Unidos (EE.UU.), para combatir el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Algunas de las acciones guerrilleras de las que se tienen aún registro es el secuestro de un vuelo de la empresa de Servicios Aéreos de Honduras, para exigir la liberación de los dirigentes del FMLN, capturados en territorio hondureño. Otro hecho importante fue la toma de cien rehenes que se encontraban en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, a cambio de la exención de presos políticos de Honduras (Canizales, 2008, pp. 112-113).

Paralelo a este escenario crítico a inicios de los ochenta, la potencia estadounidense aplicó el nuevo modelo económico neoliberal al insertar a Honduras en el mercado mundial, poniendo énfasis en la exportación, la concentración de inversiones en zonas urbanas —hecho que aumentó la desigualdad en la zona rural, lugar en el que habita la mayor parte de la población hondureña—, la privatización y la reducción de la participación estatal como agente económico en los asuntos de orden público y social. Las consecuencias sociales, políticas y económicas de este patrón de acumulación derivaron en una mayor inseguridad y disparidad social. Por consiguiente, el costo de vida se incrementó y el neoliberalismo ganó terreno, lo que derivó en altos niveles de

violencia. En 2014, Honduras se ubicó entre los países más peligrosos del mundo sin conflicto de guerra,² además de ser el que representa el mayor índice de desigualdad en Latinoamérica, según el coeficiente de Gini (ver anexo 1).

Este panorama pone en evidencia que los elementos y los mecanismos que conforman al Estado desarrollista y neoliberal en Honduras parecen tener sus raíces en la época colonial, porque ambos sistemas imponen y mantienen un poder hegemónico mundial, a través de la coerción y de un discurso de desarrollo que reduce la soberanía de las naciones, es decir, el Estado es un actor ambiguo que actúa en torno al capital y soslaya el carácter desigual que mantiene la población.

1.2 Del gobierno militar a la democracia neoliberal

La transición política hondureña de un gobierno militar a uno democrático se inició con la creación del Consejo Asesor de la Jefatura de Estado, cuyo propósito central era crear una nueva ley electoral. La ley fue decretada en 1977 —dentro del gobierno de Alberto Melgar Castro—, y en 1980, se instaló la Asamblea Constituyente y se promulgó la Constitución vigente. Este hecho derivó en la reactivación del funcionamiento de las instituciones que representaban el orden democrático como el Congreso Nacional, el Tribunal Nacional de Elecciones, así como los partidos políticos. En este sentido, la construcción del Estado democrático y de derecho en Honduras se realizó bajo la tutela militar, producto de las alianzas entre las instituciones mencionadas, las élites políticas locales y EE.UU., en medio de un escenario de crisis política de los países vecinos. De esta manera, se impuso que el proceso de democratización en Honduras fuera una “implantación del exterior y desde arriba” (Sosa, 2015, p. 10).

Durante los años ochenta, al igual que el resto de la región, el gobierno de Honduras implementó reformas orientadas a una mayor afluencia de capital extranjero y a una considerable flexibilización laboral. A finales de 1979, por las revueltas sociales y la extensión de la lucha por las guerrillas en otras naciones centroamericanas, la milicia hondureña comenzó a secundar las políticas estadounidenses en la región. Esta alineación benefició la economía fortaleciendo los sectores militares, que pasó a recibir mayores recursos. Los gastos de defensa aumentaron significativamente a lo largo de la década de 1980, pues llegó a representar del 20% al 30% del presupuesto nacional. Con ello, se hizo evidente que Estados Unidos inyectó millones de dólares

² En mayo de 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer un informe en donde analiza el comportamiento y la concentración de violencia en todo el mundo, y concluyó que ésta se encuentra en un pequeño grupo de dieciocho países que acoge el 4% de la población global en el que ocurren un cuarto de las muertes violentas. Entre estos, las cifras más altas las tienen Siria, Honduras y Venezuela (Organización de las Naciones Unidas, 2015).

para consolidar a Honduras como punto estratégico en Centroamérica. De esta manera, “ante los ojos del mundo no había diferencia entre Honduras y una base militar de Estados Unidos en Filipinas. De banana republic pasó a ser conocida como USS Honduras” (Torres-Calderón, et. al., 2002, p.8). Edelberto Torres Rivas (2007, pp. 177-178) refiere que, con las elecciones presidenciales y de otros cargos populares llevadas a cabo en 1980, Honduras se convirtió en la primera república centroamericana donde la milicia cedió el gobierno a los civiles, pero no el poder. Esta simulación delineó la democracia del país, en la que la alternancia del gobierno entre el partido Nacional y el Liberal colocó el poderío total en manos de los militares y en el gobierno de EE.UU. Esta configuración estuvo acompañada por la ocupación constante del ejército estadounidense en Palmerola y en Comayagua, lugares que funcionaron como centros de operación para combatir al Ejército Popular Sandinista y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador. En esta dirección, un dato relevante que demuestra la subordinación y la alianza de Honduras con el gobierno norteamericano es la inversión económica y militar que obtuvo de parte de Estados Unidos, como se ha venido mencionando: tan sólo entre 1980 y 1987 recibió 1,288 millones de dólares, de los cuáles 358.7 se destinó al área militar hondureña, lo que representó el 27.8% de la cantidad total (Meza, 2019, p. 39).

Víctor Meza (2019, pp. 37-58) en “Los militares hondureños en la hora de Washington” señala que la instauración de la democracia a través del afianzamiento del bipartidismo, la alianza internacional, la cooptación de los movimientos obreros y campesinos en Honduras, así como el papel silencioso de la Iglesia católica en los procesos de cambios revestidos en varios casos de violencia, intentaron evitar el desarrollo de procesos revolucionarios. Sin embargo, a finales de los ochenta, las organizaciones sociales obreras campesinas y estudiantiles se organizaron y fundaron la Plataforma de Lucha para la democratización de Honduras conformada, entre otras, por la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOHO), la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras (FECOPRUH), la Confederación Hondureña de Cooperativas (CHC), la Central General de Trabajadores (CGT) y la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras (FITH) (Sosa, 2015, p. 15). No obstante, el gobierno en turno y la división interna golpearon este movimiento, que, como otros, se caracterizó por el debilitamiento de las protestas sociales y su tendencia al sectarismo y ruptura. Por consiguiente, a partir del análisis de Eugenio Sosa, es posible señalar que

de la experiencia de la Plataforma de Lucha para la Democratización de Honduras y de su propuesta, es factible llegar a las siguientes conclusiones: Una. La Plataforma de Lucha para la Democratización de Honduras constituye el esfuerzo unitario plural más importante

del siglo XX. Dos. La propuesta de la Plataforma de Lucha para la Democratización de Honduras constituía un planteamiento inscrito en la lógica de un desarrollo nacional, democrático, incluyente y progresista (2015, p. 15).

En definitiva, el plan político formulado por Estados Unidos buscó generar una transición política en la que el poder ejercido por los militares en años anteriores fuera transferido al poder ciudadano. De esta manera, la llegada de la democracia permitió el desembarco de políticas neoliberales, las cuales se implementaron decididamente en la década de 1990 en adelante (Ochoa 2015, pp.7-8).

1.3 Desmilitarización y privatizaciones

En el transcurso de los noventa, los procesos políticos y sociales estuvieron relacionados con la desmilitarización. Una de las primeras acciones del gobierno estadounidense fue bajar el presupuesto asignado a los militares, que pasó de 77.4 millones de dólares en 1984 a 2.5 en 1994. Paralelamente, y en el marco del modelo neoliberal —como salida a la pérdida de ingresos provenientes de EE.UU. en concepto de apoyo militar—, el ajuste económico comenzó con el aumento de impuestos sobre las ventas, la devaluación de la moneda (lempira) y la eliminación del proteccionismo local. Ante este panorama surgieron algunas protestas, en 1990, como las del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (SITRAMEDYS), las de los trabajadores de la Energía Eléctrica y las del Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company (SITRATERCO). Asimismo, en este periodo, se llevó a cabo la participación de los campesinos en contra de los terratenientes (un fenómeno en cierto grado nuevo), que derivó en la represión por parte de los cuerpos policiales. Básicamente, las movilizaciones hondureñas expresaron su rechazo a la política neoliberal, resistencia que fue alentada fundamentalmente por el aumento de precios y el deterioro de las condiciones de vida (Sosa, 2019, p.163).

En consecuencia, la desmilitarización fue un proceso que incidió en la desarticulación militar con la creación del Ministerio Público que desvinculó la policía nacional de la milicia. Seguido de ello, se eliminó el servicio militar obligatorio, así como la sustitución de la figura del Jefe de las Fuerzas Armadas por una Junta de Comandantes (Sosa, 2015, p. 20).

1.4 Reformas agrarias

Las tensiones entre los militares, las empresas y el nuevo gobierno surgieron al cambiar la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Nacionalización de Bosques, enmarcadas en las disposiciones típicas del modelo neoliberal, como señala Harvey, tendiente a la

mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de poblaciones campesinas; la conversión de formas diversas de derechos de propiedad (comunal, colectiva, estatal, etc.) en derechos exclusivos de propiedad privada; la supresión de los derechos sobre los bienes comunes; la mercantilización de la fuerza de trabajo y la eliminación de modos de producción y de consumo alternativos (autóctonos)” (2007, p. 175).

De esta forma, se produjeron las condiciones de expropiación de los bosques a las comunidades indígenas —legitimado por la creación de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR)— vinculada a la propiedad y a la comercialización de sus recursos naturales (Barahona, 2005, p. 235). Esto provocó el surgimiento de organizaciones indígenas y afrodescendientes como la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) (1981), la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) (1986), la Unidad de la Mosquitia (MASTA) (1987), Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH) (1988), la Federación de Tribus Indígenas Pesh de Honduras (1988) y la Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras (ONILH) (1989). Uno de los logros de estas agrupaciones fue que la Constitución Política de Honduras de 1982, en el “Capítulo III” de la Reforma Agraria, Artículo 346, los reconocieran como “patrimonio cultural e histórico de la nación hondureña” (p. 79). También, en el mismo apartado, señala el deber del Estado de proteger sus derechos, especialmente los relacionados a sus tierras y bosques. Por su parte, los pueblos chorti, lenca y tolupán avanzaron en el reconocimiento y la legalización del suelo en el área central y occidental del país. Sin embargo, con el avance de los años, en 1992, mediante el Decreto N° 31/92 se implementó la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola que invalidó el estatus comunal de las tierras ancestrales y permitió el ingreso a terceros. Un ejemplo de ello se encuentra en los objetivos de la nueva ley, Artículo 4, el cual establece lo siguiente:

Procurar un adecuado marco de seguridad en la tenencia de la tierra y acceso a la misma, así como permitir que empresarios y empresarias que no son propietarios puedan realizar inversiones productivas en el campo por medio de contratos de arrendamiento con propietarios y propietarias rurales o de mecanismos de coinversión con agricultores y agricultoras independientes y beneficiarios o beneficiarias de la reforma agraria (1992, p. 3).

Estos cambios originaron que diferentes organizaciones se movilizaran a Tegucigalpa en las llamadas peregrinaciones indígenas y negras, entre 1994 y 1998, para conseguir el cumplimiento de algunas de sus peticiones. Los logros más importantes fueron la firma del Convenio 169 de la OIT por parte del Estado,³ la fundación de municipios indígenas, el cierre de algunos aserraderos que dañaron los recursos naturales y la

³ “El Convenio núm. 169 tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan” (OIT, 2014, p. 8).

creación de áreas protegidas como la Biosfera Tawahka Asangni, Reserva Forestal Antropológica de la Montaña de la Flor, Parque Nacional Patuca, Punta Izopo y Punta Sal.

1.5 Siglo XXI y la agudización de las desigualdades

En 1998, el huracán Mitch inauguró una etapa de crisis económica, social y ambiental en el país. El evento meteorológico dejó evidenciada la vulnerabilidad del pueblo hondureño, el cual agudizó los problemas de desigualdad. A partir de tal suceso, los procesos de migración, pobreza y violencia marcaron a la ciudadanía. Paralelamente, a inicios del siglo XXI, comenzó uno de los fenómenos sociales más complejos —no sólo a nivel nacional, sino continental—: el surgimiento de las maras (organización criminal internacional de origen centroamericano), que colocó a Honduras en la escala de los países más inseguros del orbe.

Mitch es un referente fundamental para comprender las carencias y exacerbaciones de Honduras del siglo XXI. El cataclismo ambiental está enraizado en la memoria colectiva de los lugareños porque está considerado como uno de los ciclones tropicales más funestos de América Latina en los últimos años. El evento ocasionó miles de desapariciones y desplazamiento humano, daños al patrimonio histórico y a la infraestructura industrial y turística, así como la destrucción de flora y fauna endémica. A partir de la catástrofe, varios estudios han partido de las secuelas que el fenómeno natural dejó a su paso, tomando en cuenta que en años anteriores, en 1974, el huracán Fifi había sacudido también la costa norte del país (Enoct y García, 2021, p. 6). Así, la ubicación geográfica sumada a las limitaciones económicas de Honduras, provocaron que el territorio fuera más susceptible a golpes meteorológicos, los cuales se convirtieron gradualmente en problemas sociales. El desastre evidenció la falta de bases sólidas del Estado para hacer frente a las dificultades. Tan sólo entre 1998 y 2017, Honduras junto con Puerto Rico y Myanmar obtuvieron los niveles más altos de afectación climática extrema, según el Índice de Riesgo Climático Global (IRC) del Germanwatch de 2019,⁴ en cuyo informe se reporta que los países en vías de desarrollo son afectados de forma más severa que los ricos, dado que la logística para atender emergencias de esta envergadura es casi nula y la pérdida humana es mayor (Eckstein, et. al, 2018, pp. 2-4) (ver anexo 2). El caos que propició Mitch expuso las deficiencias políticas y económicas que antecedieron al acontecimiento climático. El desastre orilló a varias familias a emigrar hacia el extranjero como estrategia de

⁴ El IRC del Germanwatch es un análisis anual que mide el impacto de los eventos climatológicos extremos y cómo estos afectan el rubro social modificando los datos socioeconómicos. Su finalidad es colocar en el centro del debate las políticas, acuerdos y negociaciones internacionales sobre el clima (Eckstein, et. al, 2018, p. 1).

sobrevivencia y ascenso social, debido al estado deplorable de las instancias de salud e infraestructura en general. El destino que primó fue Estados Unidos de América con un 91.4% de migrantes hondureños,⁵ sin embargo dadas las circunstancias críticas, los ciudadanos diversificaron sus opciones y escogieron Centroamérica como alternativa (1.9%),⁶ así como México (2.2%), España (2.1%) y otros lugares alrededor del mundo no especificados (2.4%), según el censo de Honduras del año 2001 (Flores, 2009, p. 268).⁷

Por consiguiente, el huracán Mitch —por su huella indeleble en la sociedad hondureña— resultó ser el hito del asunto migratorio y de la desigualdad social provocada por tácticas neoliberales. La década de 1980 fue clave para Honduras, pues había conseguido una aparente estabilidad gracias a la democracia —después de haber atravesado por un régimen militar—. Empero, de 1990 al 2000, los hondureños no lograron consolidar un plan de desarrollo socioeconómico acorde a sus necesidades, ya que los factores climáticos desempeñaron un papel adverso en las cosechas ocasionando sequía y la caída de los precios del café. Estos tres componentes ocasionaron que el gobierno aplicara programas instaurados por el FMI y el Banco Mundial que consistieron en privatizar instituciones públicas, implementar reformas fiscales y ejecutar una austeridad financiera. Dicha situación provocó el incremento de la deuda externa del país, por lo que las instancias gubernamentales se preocuparon por destinar los ingresos nacionales en el abono de la deuda, en lugar de invertir en el crecimiento interno (Flores, 2009, pp. 248). De este modo, la imposición de las medidas neoliberales agravó la poca certidumbre nacional, pues la carencia de fuentes de empleo, educación de calidad y servicios básicos generaron emigración masiva, falta de oportunidades en las localidades, salarios bajos, pobreza y —lo más alarmante— delincuencia organizada, extorsión y violencia de grupos delictivos como los maras (Hernández, 2020, pp. 89-90).

Así pues, el huracán Mitch fue la puerta de entrada a una serie de eventos desafortunados que modificó el *status quo* de Honduras y de la región que conforma el Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA) integrada por Guatemala, El Salvador

⁵ La alta demanda de movilización hacia Norteamérica produjo que Estados Unidos lanzara un plan de protección temporal para llevar a cabo la deportación de hondureños. Lo mismo hicieron México y Guatemala (Flores, 2009, p. 268).

⁶ Dentro de la región centroamericana, El Salvador fue el país de resguardo para varios afectados, aunque antes del Mitch, la ruta hacia la nación colindante ya era practicada, no obstante con el acontecimiento climático esta vía acrecentó su movilización (Flores, 2009, pp. 267-268).

⁷ El grado de afectación del huracán Mitch fue de tal manera que el Instituto Nacional de Estadística de Honduras incluyó en la boleta censal preguntas como “Después del huracán Mitch (octubre 1998), ¿alguna persona que pertenecía a este hogar se ha ido a vivir a otro país?”, de la que se desprende la siguiente “De esas personas que se fueron después del Mitch, ¿cuántas viven actualmente en: a) Estados Unidos; b) Canadá; c) México; d) Centroamérica; e) Otros países?” (Instituto Nacional de Estadística, 2001, p. 2).

y el país estudiado en el presente artículo. Las tres naciones tienen denominadores comunes: el desempleo, el bajo poder adquisitivo, la escasez alimentaria, la desigualdad, la contaminación ambiental, la migración, la violencia, las pandillas y demás dificultades originadas por la agenda internacional neoliberal y la herencia histórico-cultural (Astorga, 2017, p. 12). Sin embargo, no se pueden atribuir dichos problemas únicamente al pasado armado y dictatorial de la región —en específico de Honduras—, ya que estos también están ligados a la violencia estructural que ejercen las instituciones hegemónicas sobre las masas (Garzón et. al., 2016, p. 104).⁸

Si bien, la materialización de la violencia estructural está proyectada en la pobreza, el hambre y la inaccesibilidad a una vida digna y adecuada, la desigualdad, la injusticia social y la delincuencia es estimulada también por la creciente expectativa de consumo, la falta de empleo local, el crecimiento urbano desordenado, el narcotráfico y la migración; este último elemento induce a la desintegración familiar, por ende, a la formación de nuevos parentescos externos como los vínculos creados por los maras o las pandillas. Los integrantes llegan a experimentar un sentimiento de inclusión, protección e identidad grupal —negado por la sociedad—, por lo que reconocen en estas organizaciones criminales a su nueva familia (Astorga, 2017, pp. 19 y 26).

En definitiva, la violencia estructural y la ampliación del neoliberalismo en Honduras perpetraron el individualismo y la desigualdad, con las que se deterioró la vida comunitaria, haciendo que la descomposición del tejido social se acelerara para dar paso al autoexilio como medio de salvación. Del TNCA, Honduras destaca por ser la nación más desigual. De acuerdo con el porcentaje de población urbana en situación de pobreza e indigencia de 1990 al 2010, Honduras reportó un 70% de 1990-1993; 75% de 1994-1996; 73% de 1997-1998; 72% de 1999-2001; 67% en 2002; 63% de 2003-2005; 59% en 2006; 57% de 2007-2008; 55% en 2009 y 56% en 2010 (ONU-Habitat, 2012, p. 43), cifras elevadas en comparación con Guatemala y El Salvador (ver anexo 3).

Así entonces, los niveles de pobreza y marginación de los sectores más vulnerables de la población, por la desatención del gobierno, se manifiesta en la desigualdad en el acceso a la información, pues mientras que la clase acomodada puede pagar una formación académica y profesional integral para insertarse exitosamente en el ámbito cultural y laboral, los más desfavorecidos aprenden a vivir en el rezago educativo,

⁸ Entiéndase violencia estructural como un concepto de coacción sistemática en la que se genera una agresión indirecta desde esferas sociales, políticas y económicas hacia personas a las que se les despoja de sus derechos y recursos, cuyo modo de vida es adaptarse a la marginación, la precariedad, la explotación y la exclusión por ubicarse en la parte inferior de la jerarquía social. En esta dinámica se priorizan los intereses de la clase privilegiada, quienes se benefician de la desigualdad y las carencias del resto de la población (Garzón et. al., 2016, pp. 105-106).

político y social. Una reducida cúpula de poder concentra los bienes y riquezas, de modo que el recurso asignado para este rubro se invierte en los beneficios de la élite, propiciando que la violencia estructural sea más enfática (Garzón, 2016, pp. 197-108). Para muestra de ello, en 2014 Honduras apareció en el Índice de Miseria Mundial en el puesto 26 de 108 países (Hanke, 2015, s.p), dato que va de la mano de la tasa de criminalidad registrados de 2004-2014, el cual comenzó con el 30.7% de homicidios que representó 2,155 asesinatos en 2004 y cerró a la alza con 68% que en números simbolizan 5,936 muertes en el 2014. Honduras, por entonces, destacó por ser uno de los países más peligrosos del mundo (Sosa, 2015, p. 26) (ver anexo 4).

2. Aspectos económicos de la Honduras neoliberal

El perfil histórico de Honduras tuvo que ver con un sistema colonial y una economía de enclave, sin embargo, fue a mediados del siglo XX, en el contexto de la Guerra Fría, cuando se perfilaron los cambios políticos y económicos como antecedentes al neoliberalismo aplicado en los tempranos noventa.

La pequeña oligarquía hondureña desde un principio demostró ser incapaz de promover un proyecto nacional significativo. En este sentido, la “pobreza de la élite hondureña” se transformó en “una broma que circuló en la década de 1980, acerca de que Honduras no pudo ni permitirse “una oligarquía”” (Euraque, 2019, p. 22) Más allá de ello, la ausencia de una oligarquía nacional constituida implicó que los principales cultivos como el café y el banano no sirvieran como economía extensiva y tampoco para la constitución de un gobierno basado en el poder terrateniente (Euraque, 2019, p. 22). En cambio, se estableció un sistema de concesiones de tierras de cultivo, exportaciones e importaciones a capitales transnacionales. La “economía agroexportadora bananero-concesionaria no produjo un capital millonario entre las élites hondureñas” (Euraque, 2019, p. 22-23), sino que devino a partir de la década del sesenta del siglo XX en alianzas con los capitales extranjeros, fundamentalmente estadounidenses, en las que la clase alta, además de concesionar cultivos, forzaron reformas institucionales. Como señala Castro Suárez, el resultado fue un Estado precario que consolidó a una élite subordinada a los intereses estadounidenses para “lograr apoyo y alcanzar o mantener el poder” (Castro-Suárez, 2011, p. 47).

También, en este periodo, comienza a constituirse una burguesía conformada por algunas y pocas familias de origen judío y árabe:

Se generó una élite económica compuesta por actores predominantemente comercial-mercantilistas y, sobre todo, de ascendencia árabe-palestina, cuyos principales capitalistas, aún en la década de 1950, carecían de la ciudadanía hondureña. Por lo tanto, estas élites carecían de presencia o gestión política electoral. Si bien en el resto de Centroamérica

la tradicional clase económica dominante, criolla-mestiza, se fundamentó en dos fuentes tradicionales de poder político; en Honduras, el control sobre la tierra en cultivos de exportación –café y banano– dio lugar a otro proceso: un *Liberalismo abortado*. El sistema político hondureño con frecuencia sucumbía ante los caudillos militaristas de los partidos políticos por sí solos, o bien, ante alianzas entre estos últimos y la política interventora de las empresas bananeras extranjeras y la política exterior de los diferentes gobiernos de EE. UU., con escasa incidencia cohesiva y coherente de una oligarquía terrateniente” (Euraque, 2019, p. 23).

De esta manera, surgieron grupos económicos que se consolidaron y están vigentes en la actualidad: los Rosenthal, los Facussé, los Larach, los Nasser, los Kafie y los Goldstein. Familias que han dominado la industria ensambladora, la energía térmica, las telecomunicaciones, el turismo, la banca, las finanzas, los medios de comunicación, las cementeras, los comercios y los aeropuertos: “Prácticamente todo. Son el núcleo duro de ese 3% de hondureños que controla el 40% de la producción nacional de un país con un 70% de pobres” (García, 2009).

Honduras inició a partir de los ochenta varios cambios. Por un lado, como ya se señaló, los militares bajo presión estadounidense convocaron a elecciones para constituir un gobierno civil, aunque negociaron la conservación del poder real. Es decir, el cambio respondió a presiones externas más que a reclamos internos. Por otro lado, se inició una transformación económica, pero sobre todo social y cultural, derivada por medidas de carácter neoliberal llevadas a cabo indistintamente por los presidentes liberales o nacionalistas, dando cuenta de que no se marcan diferencias ideológicas en el bipartidismo histórico hondureño.

A partir de 1990, hubo un reordenamiento económico que tuvo grandes repercusiones sociales. Las fuerzas sindicales de trabajadores y los movimientos indígenas se encontraban debilitados desde los sesenta y los setenta, ya que fueron limitados por los militares y los intereses estadounidenses. Aunque el periodo democrático parecía ser un contexto más alentador, lo cierto es que las medidas implementadas afectaban directamente a los trabajadores, a los campesinos y a las comunidades indígenas. Se liberaron las tasas de interés, se redujeron los aranceles para dar apertura al comercio internacional y se puso en funcionamiento una política monetaria contraccionista que se fortaleció en 1997. En lo institucional, se reformó la Ley del Banco Central con la finalidad de conservar el valor de la moneda, pero también se limitó el crédito al sector público; este cambio no hizo posible la estabilidad externa, fiscal y tampoco evitó la inflación. Por ello, se aplazó el pago de la deuda externa, y además, hubo una crisis energética que causó daños en la industria y en los servicios. A finales de la década del noventa, bajo el pretexto de una inadecuada administración de los bienes públicos, se hicieron ajustes consecutivos a la economía, al mismo tiempo que el país se volvía más susceptible a

los *shocks* externos (Serna, 2016, pp. 11-12). Ante este panorama, las organizaciones gremiales o sindicales intentaron, de alguna manera, resistir las imposiciones del nuevo modelo económico. Sin embargo, desde el gobierno se implementaron acciones para dismantelar los movimientos sociales: “las acciones de los sectores en el poder político fueron encaminadas a destruir estas organizaciones por medio del montaje de asociaciones paralelas o persecución de líderes” (Martínez, 2011, p. 97). Los movimientos campesinos, por su parte, también plantaron resistencia ante la Ley para la Modernización y Desarrollo del sector agrícola que agudizaba las diferencias entre terratenientes y campesinos, privilegiando a los primeros y socavando las bases del movimiento campesino. Al igual que a los sectores obreros, se persiguió a los principales líderes y se conformaron nuevas organizaciones afines a los intereses agroindustriales. Como bien señala Martínez, “La década del noventa encuentra un movimiento social organizado totalmente débil y diezmado, que no logra hacer frente a la oleada neoliberal, sino más bien tiene que retrotraerse” (2011, p. 98). Las estrategias implementadas desde el gobierno llevó a que la mayoría de los trabajadores y campesinos no se sintieran representados por las agrupaciones sindicales, lo cual desembocó en que solamente el 6% del total de los trabajadores estuvieran sindicalizados, según la Confederación Sindical Internacional en el 2010 (Martínez, 2011 p. 98).

En el año 2006, se produjo un cambio en el modelo político económico de Honduras con la presidencia de Manuel Zelaya. Su gobierno se caracterizó por una serie de reformas identificadas con la izquierda:⁹ las medidas se encaminaron a reactivar la participación del Estado en materia pública; la élite conservadora hondureña y los inversionistas extranjeros se alertaron porque consideraban que era un peligro. En este entendido, su gobierno tuvo dos momentos clave: uno en materia energética al dar de baja el convenio con empresas que tenían los derechos exclusivos para la importación del petróleo y otro social con el aumento al salario mínimo. En el 2008, Zelaya suscribió un acuerdo con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), con el cual Honduras y Venezuela pactaron en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), un precio menor para la importación de petróleo (Jiménez, 2010, p. 44). El otro momento relevante fue en relación al incremento del salario mínimo, y pese a que la

⁹ Manuel Zelaya proviene de los sectores tradicionalistas y empresariales de Honduras. Ocupó diversos cargos políticos, antes de ser candidato a la presidencia de la República. Gracias a esta afiliación conservadora, no levantó sospechas sobre posibles cambios en la política económica y obtuvo el apoyo de la derecha. Luego con las reformas que llevó a cabo de índole progresista —contrarias al cánón neoliberal— perdió el apoyo de todos los grupos de poder que alentaron el golpe de Estado que impuso a su vicepresidente Micheletti (de origen conservador) como presidente; quien resultó más a fin a sus intereses (De Gori, 2014, p. 55).

medida parecía benéfica en favor de los sectores más vulnerables, la propuesta tuvo dificultades. Esto se debió a que el problema de base del gobierno de Zelaya estuvo dado por el escaso apoyo político dentro de su propio partido y por parte del sector económico privilegiado. La dificultad salarial tuvo distintas aristas. La primera es que el sueldo de muchos trabajadores estatales estaba indexado al salario mínimo, por tanto, esto produjo que el Estado no pudiera pagarles. La segunda, es que los grupos industriales se resistieron a la medida y realizaron despidos (De Gori, 2014, p. 57).

Posterior a ello, en 2009, se produjo el golpe de Estado por el cual Zelaya fue expulsado del país y Roberto Micheletti —uno de los instigadores del golpe— asumió el cargo. Tras este periodo hubo algunas consecuencias inmediatas, como por ejemplo, el bipartidismo histórico de Honduras perdió en parte su preponderancia y se conformaron nuevos partidos políticos que tuvieron participación en las elecciones de 2013 (ver anexo 5). El golpe de Estado marcó una “ofensiva conservadora que permitió a la élite económica y política, así como al poder militar, recuperar posiciones estratégicas” (Jiménez, 2010, p. 32). En definitiva, Honduras durante el periodo 2006-2008, implementó una serie de nuevos programas sociales, aumentó el gasto social y el salario mínimo. Estos avances fueron revertidos en los dos primeros años posteriores a la destitución de Zelaya de su cargo. (Johnston y Lefebvre, 2013, pp. 16-17).

Después del golpe, por presión internacional, los hondureños convocaron a nuevas elecciones en la que salió victorioso Porfirio Lobo Sosa, quien asumió su mandato de 2010 a 2014. El nuevo presidente dio marcha atrás a las políticas de Zelaya y retomó las medidas neoliberales. Esto ocasionó que entre el 2010 y el 2013 aumentara el desempleo y el subempleo “y más del 43 por ciento de la fuerza laboral trabaja a tiempo completo pero con un ingreso menor al salario mínimo” (Johnston y Lefebvre, 2013, p. 18). En este marco, el entonces dirigente Lobo Sosa acudió a la instancia del FMI para solicitar un crédito *stand by* por dieciocho meses y 129.5 millones de dólares por concepto de Derechos Especiales de Giro (un activo de reserva internacional creado en 1969 por el Fondo Monetario Internacional). De este modo, en el periodo de 2010-2012, la economía se movió a un ritmo pormenorizado, representando en promedio un 3.5% de crecimiento, pero en medio de esos dos años, en el 2011, el país experimentó un momento crítico por un desequilibrio fiscal. Ante este horizonte, el FMI sugirió aplicar “medidas macroeconómicas para disminuir el crédito; reducir el gasto corriente y eliminar las exenciones tributarias” (Serna, 2016, pp.19-20).

A lo anterior, conviene resaltar que, aunado a las condiciones económicas del país, en el aspecto social y político, hubo un nuevo intento por modificar la Constitución,

debate que produjo tensiones entre el Poder Legislativo y Judicial, sin llegar a ningún acuerdo (Serna, 2016, p. 20). No obstante, se aprobaron leyes para apuntalar el sistema neoliberal, tales como la Ley del Programa Nacional de Empleo por Horas en la que los empresarios se evitaron el pago de derechos sociales y prestaciones laborales (2010), la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada (2012), la Ley de Minería favorable a los intereses empresariales (2012) y la creación mediante una enmienda constitucional de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) conocidas como “ciudades modelo” (Sosa, 2014, pp. 209-210).¹⁰ Tales leyes ocasionaron protestas sociales a lo largo del país en la administración de Lobo Sosa, la cual se caracterizó por la criminalización de los campesinos en defensa de sus tierras, la lucha por los derechos laborales del magisterio, la protección de los recursos naturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la resistencia de la comunidad de la diversidad sexual (Sosa, 2014, p 205).

2.1 Inversión y capital extranjero

La década de los ochenta en Honduras puede dividirse en tres segmentos: 1) vuelta a la democracia; 2) crisis económica y preponderancia de los problemas de seguridad y 3) mayor dependencia política y económica de los Estado Unidos (Bull, 2008, p. 191). Durante la administración de Ronald Reagan (1981-1989) se llevó a cabo una integración económica denominada Iniciativa de la Cuenca del Caribe conformada por Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y la zona del Caribe (Belice), sin contar a Cuba y Guyana. El pacto permitía un acceso libre de derecho al comercio estadounidense que excluía los textiles, el calzado, el cuero, el atún enlatado, los derivados del petróleo y los relojes durante doce años (Bethell, 2001, p. 48).

Los datos del Banco Central de Honduras, en el documento *Inversión Extranjera Directa en Honduras 1993-2003* (2004), recoge que la Inversión Extranjera Directa (IED) se acrecentó a partir de los años noventa en sectores como minería, comunicaciones y el rubro financiero. En 1992, se lanzó el Decreto No. 80-92, en el que se aprobó la Ley de Inversiones, la cual buscó promover la inversión privada nacional y extranjera. En la misma línea, y para elevar la confianza de la IED, el gobierno hondureño firmó una serie de acuerdos bilaterales, como el que suscribió con República Dominicana en 1998 y México en 2001, que también incluía a Guatemala y El Salvador. En 2005, Honduras se adhirió al Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), al que luego se sumó

¹⁰ Las ZEDE son espacios delimitados por el Estado impulsados por capital privado y sujetos a un régimen especial en el que los inversionistas están a cargo de la política fiscal, la seguridad y todos los conflictos que se generen al interior (Palma, 2019, p. 96).

Canadá. Con esta serie de convenios, los dirigentes de la nación hondureña lograron que muchas industrias, sobre todo textiles, se instalaran o invirtieran en el país. La mano de obra barata y su ubicación geográfica hicieron que Honduras se posicionara como el tercer exportador de textiles a los Estados Unidos, después de China y México (Tábora, 2007, p.19).

En ese mismo año (2005), a través de la iniciativa de deuda para países pobres altamente endeudados, Honduras se benefició con mil millones de dólares. Posteriormente, en 2007, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó mil cuatrocientos millones como un presupuesto adicional; esta ayuda benefició al inicio del gobierno de Zelaya para que tuviese un déficit presupuestario bajo. En cuanto a la inversión, hubo un crecimiento económico impulsado por la iniciativa privada, liderada por el sector manufacturero que representó el 19.5% del PIB, seguido por el financiero (15.1%), el agrícola (13.8%) y el de las comunicaciones (9.7%) (Johnston y Lefebvre, 2013 pp. 3-4).

Después del golpe de Estado en 2009, la IED disminuyó en un 44%, debido a la profunda crisis política por la que atravesaba el país. Además, la recesión global de ese año, resultó en una caída del 12.1% de las remesas, lo que representó una pérdida de 340 millones de dólares. Otra de las consecuencias de la caída del gobierno de Zelaya, es que Honduras perdió relaciones con la comunidad internacional, lo que produjo, entre otras cosas, el alejamiento del Banco Mundial y que el Fondo Monetario Internacional tomara la decisión de congelar 160 millones de dólares (CEPAL, 2010, pp. 84).

En 2010, y posterior a las elecciones en la que se eligió a Porfirio Lobo, Honduras restableció relaciones con el Banco Mundial, quien en el primer año de gobierno destinó 74.7 millones de dólares para el programa fiscal. También, retomó vínculos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y con el FMI, que decidió descongelar el presupuesto antes asignado. Por ello, en 2013, el gobierno cerró con un incremento de la IED. La economía poco a poco tomó la curva ascendente de crecimiento, que si bien no alcanzó los niveles de 2007 y 2008, sí tuvo una ligera tendencia a la alza (Ramírez, 2013 p. 142). Los sectores de mayor inversión fueron el transporte, almacenaje y telecomunicaciones que recibieron el 33.9%, el de bienes para la transformación el 16%, el manufacturero 14.4%, el comercial 11.2% y los servicios 9.2%. Sin embargo, a pesar de la inversión, el crecimiento se desaceleró como respuesta a la reducción de la formación bruta de capital fijo del sector privado, en especial el de la construcción (CEPAL, 2014).

De este modo, se puede notar que en el periodo 1993-2003, la IED se acrecentó en sectores como la minería, las comunicaciones y el área financiera. Esto fue dado

por las legislaciones que permitieron hacer cambios en favor de esos negocios, estableciendo salarios bajos que, sumado a los altos niveles de desempleo, permitieron contrataciones rápidas benéficas para los inversionistas. Otro ejemplo de esto fue la promulgación de una nueva Ley de Minería, la cual permitió la explotación a cielo abierto y el uso de sustancias prohibidas, como el cianuro. Así también, se disminuyeron aranceles y/o retenciones que debían pagar las mineras. Posteriormente, en el periodo 2006-2009, durante el gobierno de Zelaya, las inversiones continuaron creciendo, pero sólo en el primer año. Esto cambió cuando se establecieron, entre otras disposiciones, el aumento de los salarios mínimos para los trabajadores. Luego del golpe de Estado, con la llegada de Porfirio Lobo, la confianza de las entidades financieras internacionales retornó a cambio de mayores ajustes sociales y económicos. Asimismo, hubo persecuciones y desarticulación de sindicatos y otros grupos sociales, como el de los campesinos y comunidades indígenas. Es decir, el apoyo e inversión extranjera fue en la medida de promoción de ajustes y reducción de derechos laborales por parte del gobierno hondureño. Esta estrategia favoreció una creciente concentración de riqueza depositada en una minoría privilegiada, mientras que los salarios de la mayor parte de la población perdió poder adquisitivo, afectando negativamente su capacidad de consumo (Johnston y Lefebvre, 2013 p1).

2.2 Empleo y desempleo

La antesala de la implementación de las políticas neoliberales en los años noventa fue un elevado desempleo que se gestó durante la década de 1980. Como señala Serna, el contexto mundial fue de recesión, cuyas consecuencias se vieron reflejadas en la disminución de ingresos de capital extranjero, los precios de los principales productos de exportación bajaron y la mayor parte de las líneas de crédito se cerraron. Estos hechos impactaron directamente en la tasa de desempleo elevándola a un 20%, “en particular en empresas manufactureras, de la construcción y comerciales; y los ingresos personales se contrajeron, sobre todo de las clases medias y población pobre” (2016: 8). Al sentir los efectos, los sindicatos integrados por estos estratos sociales exigieron un aumento al salario, el cual fue aprobado, pero la petición incrementó el gasto público. Para solucionar el problema, el FMI sugirió al gobierno de Honduras el debilitamiento de los grupos sindicales con la intención de reducir su influencia y minimizar las pérdidas. En paralelo, las importaciones se redujeron al 40%, el crecimiento económico se ralentizó, y por consiguiente, la desigualdad se intensificó (Serna, 2016, p. 8). Otro de los puntos importantes fue que a partir de 1980 hasta la década de 1990, se hizo notable un perjudicial índice de precios de intercambio en Honduras, a causa de la desaceleración de la economía iniciada en 1973, hecho que

situó en desventaja la demanda internacional del país. El PIB por habitante en 1980, disminuyó al 1.2%, los precios se incrementaron al 18%, el déficit externo de bienes y servicios alcanzó el 13%, la deuda exterior creció hasta el 58% del PIB y el déficit fiscal fue de 7.7% (Serna, 2016, p. 7).

Como resultado de lo anterior, y debido a la restricción de la oferta laboral en Honduras, las reformas neoliberales reforzaron la desigualdad social facilitando a una minoría la mayor concentración del capital, mientras que el resto de los habitantes vivía en la miseria. Desde 1990-2010, el ingreso *per cápita* fue de apenas 0.75%, lo que significa que varios ciudadanos no tuvieron la oportunidad de ocupar un puesto dentro del mercado y se vieron en la necesidad de tomar subempleos y trabajos informales (Sosa, 2015, p. 26). Si a esto se le agrega la tendencia de la emigración que se dio de forma masiva después del huracán Mitch, el panorama se tornó más crítico. La ausencia de empleos de remuneración digna y la situación climática que devastó la región, incitó a los pobladores a abandonar las limitadas actividades rurales y urbanas —provocando una gran cantidad de jóvenes desempleados—, para ir en busca de mejoras de vida al extranjero. Para esa época, la única institución capaz de revertir la situación nacional con un programa sostenible para el desarrollo territorial, era la llamada Secretaría de Planeación, pero la agenda neoliberal la había anulado. En este sentido, otras iniciativas públicas como la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, los Programas de Mecanización Agrícola, Investigación y Extensión Agropecuaria también perdieron importancia y fortaleza administrativa, dado que dichas dependencias fueron desfinanciadas por el Estado (Serna, 2016, p. 7). Por lo tanto, pese a que el área agropecuaria era aparentemente importante para el gobierno hondureño —“casi el 50% de la población vive en el medio rural y en éste se generan empleos para más de la mitad de la población total de Honduras” (Serna, 2007, p. 8)—, los programas agropecuarios planeados para disminuir la pobreza no fueron relevantes. De acuerdo con Serna, “el sector descendió de 11% del total en 1990 a 3,5% en 2005, en tanto que la proporción del crédito agrícola en el total de la cartera pasó de 19% en 1990 a 12% en el año 2000 y a 4,5% en 2005. Sólo 3,5% de los productores recibieron crédito en 2000-2001. La falta de una política efectiva ha limitado el crecimiento del sector y, consiguientemente, del conjunto de la economía” (2007, p. 8). De este modo, la exigua atención al campo generó una pobreza estratosférica, la cual llegó a representar el 75% (p. 8) (ver anexo 6 y 7).

En términos generales, Honduras fue uno de los países que reportó menor desarrollo en América Latina en el periodo 2008-2015, debido a la recesión internacional originada en 2008 (de la que todavía en 2012 sufrían estragos) y la crisis política de 2009. El principal problema que tuvo la nación hondureña respecto

del empleo durante este periodo fue la baja cantidad y calidad de estos, a causa del incremento poblacional; lo que devino en trabajos informales y subempleos de escasa remuneración (actividades domésticas, primarias y manufactura de tecnología sencilla). Esto provocó que los oficios de altos mandos y salarios elevados como administración pública, ejecutivos y servicios de primera necesidad se mantuvieran en los mismos niveles de ocupación (Cruces et. al., 2017, p. 318). En este contexto, la dinámica del mercado laboral hondureño presentó un marcado aumento de la ciudadanía subempleada, pasando de 643,481 personas en 2001 a 2,570,068 en 2018. El subempleo en el país mantuvo un promedio de crecimiento anual de 8.5%, alcanzando sus mayores registros en los periodos 2003-2004 (31.5%) y en 2014-2015 (44.9%). A partir de 2009, la población subempleada comenzó a crecer progresivamente cada año, a excepción de los años 2013-2014 (reflejó una disminución del 24.1%) (Corea, 2018, p. 59). Todo esto se tradujo en un aumento de la pobreza moderada y en la expansión de la desigualdad en el país.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El periodo estudiado en este trabajo —el neoliberal, que abarca de 1980 a 2015— comenzó con una profunda intervención de Estados Unidos en Centroamérica para combatir el comunismo y las denominadas insurgencias, para luego enfrentar el narcotráfico y el terrorismo. Uno de los principales objetivos de esta injerencia fue la explotación de los recursos naturales para beneficio de las empresas extranjeras y el uso de la mano de obra barata. De este modo, el neoliberalismo sirvió para acentuar la desigualdad en Honduras, ya que a diferencia de otras naciones latinoamericanas, los movimientos sociales del país estaban debilitados. Además, nunca logró diversificar sus medios de producción ni llevó a cabo una reforma agraria que permitiera una verdadera redistribución de tierras. El resultado de todo esto desembocó en una profunda herida social de violencia y empobrecimiento de la población, pues los diversos gobiernos, en menor y mayor grado, fueron y siguen siendo serviles a los intereses internacionales, lo que sugiere que el sistema hondureño se encuentra atravesado por un dominio de carácter neocolonialista. Tal situación se vio agravada si a esto se le suman los fenómenos climáticos, en especial el huracán Mitch en 1998, considerado uno de los eventos meteorológicos más devastadores en la historia de América Latina.

Según datos estadísticos del Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Honduras es uno de los países más pobres en Latinoamérica, ya que la pobreza alcanzó a casi un 55% de la población en 2014 (ver anexo 8). En contrapartida, la concentración de la riqueza se distribuye en pocas

familias, que no sólo tienen la mayor parte del dinero del país, sino que también controlan sectores claves de la economía, las finanzas y los medios de comunicación. En general, este grupo está asociado a capitales extranjeros o son representantes de empresas transnacionales. Según la revista *Forbes*, una de las diez familias más ricas y poderosas de Centroamérica son los Rosenthal, propietarios del Grupo Continental: poseen 37 empresas del sector financiero, industrial, agrícola (con ingenios azucareros), ganado y producción de café. De la misma manera, tienen bajo su poder el sector turístico, la construcción y las comunicaciones (diario *El Tiempo*, Canal 11 y Cable Color). Por tanto, sólo un 3% de los ciudadanos domina el 40% de la producción nacional (Croda, 2014).

En cuanto a la situación económica, el mayor ingreso de divisas está dado por el sector primario, fundamentalmente de la exportación de café y banana. Esto trae como consecuencia que si cae el precio internacional de estos productos —como ocurrió en la década del ochenta— también lo hacen los ingresos, ya que la producción del país es limitada. Si bien, el PIB incrementó desde 1980 de unos 2 mil 500 millones de dólares a un poco más de 20 mil millones en 2015 (ver anexo 9), esto no se ve reflejado en la calidad de vida de la población, ya que los recursos y rendimientos siguen controlados por inversionistas externos en alianza con empresarios locales.

Las implementaciones neoliberales afectaron de igual forma a las instituciones y empresas estatales, desde instancias de servicios hasta agricultura. El desfinanciamiento estatal se extendió y penetró en casi todas las áreas. La primera en sufrir los estragos de esta operativización fue la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), en 1994, justo cuando la Comisión Nacional de Comunicaciones (CONATEL) comenzó a conceder permisos a empresas privadas para cubrir el mercado de telefonía celular, en lugar de ceder los derechos a esta compañía. La idea de desestatizar la corporación fue con la finalidad de subsanar el tema de la innovación tecnológica y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Cuatro años después, en 1998, el gobierno de Honduras estuvo a punto de firmar el acuerdo denominado Facilidad Ampliada de Ajuste Estructural con el FMI, para incentivar la inversión privada, regular la intervención del Estado —lo que incluía la privatización de HONDUTEL—, mejorar la seguridad social, reforzar el sistema bancario, entre otras propuestas, pero la llegada del huracán Mitch lo impidió y las partes involucradas se vieron en la necesidad de suspender el convenio (Serna, 2016, p. 11). A este respecto, en el año 2000, Teléfonos de México (TELMEX) intentó comprar HONDUTEL, pero el gobierno rechazó la oferta, y en su lugar, a sugerencia del Banco Mundial, las autoridades optaron por realizar una reforma parcial al sector de las telecomunicaciones (Bull, 2008, p. 177). Más tarde, en 2013, Romeo Vásquez Velázquez, ex gerente de HONDUTEL, externó que

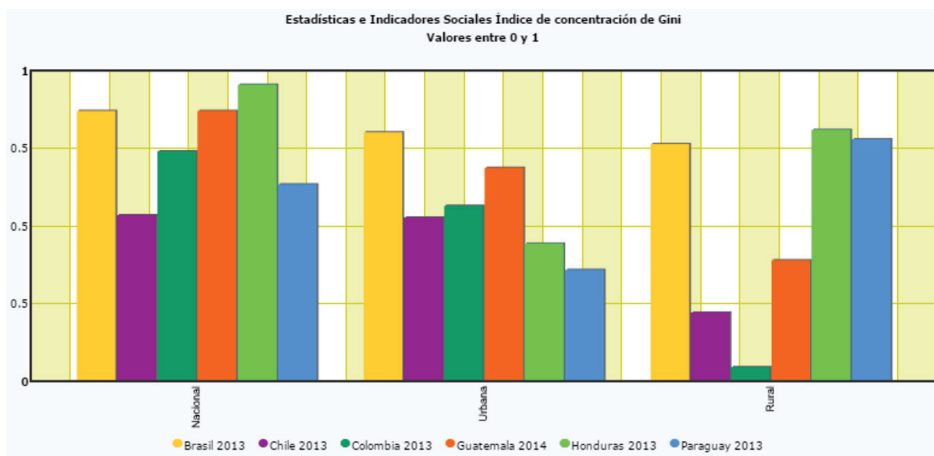
varias industrias internacionales habían expresado su interés en comprar activos de la empresa, “sin embargo, debido a la inseguridad jurídica y las demandas laborales se ‘ahuyentaron’ a los inversionistas” (La Prensa, 2013). Luego, en 2014, se anunció que más compañías públicas serían transferidas al sector privado, entre las que se consideraron la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como las que emiten los pasaportes y las que registran las propiedades y vehículos (Velásquez, 2014).

Sin duda, la aplicación del neoliberalismo en Centroamérica, y particularmente en Honduras, acentuó los problemas políticos, sociales y económicos preexistentes en la región, bajo la lógica de la liberalización de los mercados. Desde esta perspectiva, durante el periodo que abarca el presente artículo, los efectos negativos se hicieron visibles en la privatización de los servicios públicos, en la reducción del gasto social, en el incremento de la deuda externa con afectaciones al equilibrio económico y la estabilidad fiscal —lo que indujo a que el país se volviera más dependiente de la inversión extranjera—, en el aumento del sector informal a falta de garantías laborales, en la intensificación del extractivismo de recursos naturales (perjudicial para los ecosistemas) y en la notoria exacerbación de la desigualdad económica que amplió la brecha entre ricos y pobres.

En síntesis, los intelectuales y ejecutores del neoliberalismo, en específico los imperialistas norteamericanos, han difundido e impuesto una ideología basada en la libertad estadounidense universal que debe ser respetada y practicada en todos los sentidos, y cuya ejecución no debe ser desestimada. Empero, como apunta David Harvey, esto puede ser revertido con una democracia y un sistema de valores que coloque la igualdad, la inclusión y la imparcialidad en el núcleo: “El mundo actual está en condiciones de rechazar este ademán imperialista y re proyectar sobre el centro del capitalismo neoliberal y neoconservador, un abanico de valores completamente diferente, esto es, los de una democracia abierta consagrada a la realización de una igualdad social ligada a la justicia económica, política y cultural” (2007, p. 212). De este modo, para avanzar hacia una sociedad que distribuya la riqueza y las oportunidades de manera equitativa y justa, es menester hacer una evaluación que priorice el bienestar comunitario y garantice el crecimiento económico para la prosperidad del Estado y la población.

ANEXOS

1. Concentración de ingreso en América Latina medida por coeficiente de Gini. Comparación entre países con mayor desigualdad. Honduras (56); Colombia (54); Brasil (55); Guatemala (55); Chile (51)



Fuente: CEPAL sobre datos de 2013.

2. Índice de Riesgo Climático Global a largo plazo: los diez países más afectados (1998-2017)

Ranking 1998-2017 (1997-2016)	País	Valor IRC	Muertos (por año)	Muertos por 100 000 habitantes (por año)	Pérdidas en millones de dólares (PPA) (por año)	Pérdidas por unidad PBI en % (por año)	Número de eventos (1998-2017)
1 (100)	Puerto Rico	7,83	150,05	4,061	5 033,16	4,204	25
2 (1)	Honduras	13,00	302,45	4,215	556,56	1,846	66
3 (3)	Myanmar	13,17	7 048,85	14,392	1 275,96	0,661	47
4 (2)	Haiti	14,83	281,30	2,921	418,21	2,642	77
5 (5)	Filipinas	19,33	867,40	0,971	2 932,15	0,576	307
6 (4)	Nicaragua	20,00	163,60	2,945	223,25	1,009	45
7 (6)	Bangladesh	26,33	635,50	0,433	2 403,84	0,640	190
8 (7)	Pakistán	29,83	512,40	0,315	3 826,03	0,567	145
9 (8)	Vietnam	31,33	296,40	0,350	2 064,74	0,516	220
10 (44)	Dominica	33,00	3,35	4,718	132,59	21,205	8

Fuente: IRC, Germanwatch 2019.

3. Porcentaje de población urbana en situación de pobreza e indigencia de 1990-2010 de países de América Latina y el Caribe

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Argentina					16					24			45		29	26	21			11	9
Bolivia (Est. Plu.)					52			52		49			52		54			42			
Brasil	41			40			31			33		34	34	36	34	33	30	27	23		22
Chile	39				27		22		21		20			19		14					12
Colombia		53			45			45		51			49	47	46	45			40	40	39
Costa Rica	25				21			19		18			18		19	20	18	18	16	19	17
Ecuador	62				58			56		64			49		48	45	40	39	39	40	37
El Salvador						46		44		39		39			41					42	41
Guatemala									49				45				42				
Honduras	70				75			73		72			67	63			59	57		55	56
México				37		46		39		32		32			33	29	27		29		32
Nicaragua				66					64			64				54					
Panamá		31			24			23		20			26		22	22	20	19	17	16	15
Paraguay					50		46			49		50			58	53		54	50	48	47
Perú								34		36		42		60	37	37	31	26	24	21	19
Rep. Dominicana													42		52	45	42	43	42	39	40
Uruguay	18				10			10		9			15		21	19		18	14	11	9
Venezuela (Rep. Bol.) ^a	39				47			48		49			49		45	37	30	29	28	27	28
ALC	41				39			36		37			38			34	31	29	27	27	26

Fuente: ONU-Habitat y CEPALSTAT.

4. Homicidios en Honduras por año de 2004-2014

Año	Homicidios totales	Tasa de Homicidios
2004	2,155	30.7
2005	2,417	37.0
2006	3,018	46.2
2007	3,262	49.9
2008	4,473	57.9
2009	5,265	66.8
2010	8,944	77.5
2011	9,799	86.5
2012	10,411	85.5
2013	6,757	79.0
2014	5,936	68.0

Fuente: Observatorio de la violencia del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad.

Boletín Nacional de enero a diciembre de 2014.

5. Partidos políticos elecciones 2013

Partido Político	Porcentaje de votos obtenidos
Partido Nacional	36.89%
Partido Libertad y Refundación	28.78%
Partido Liberal	20.3%
Partido Anticorrupción	13.43%
Alianza Patriótica Hondureña	0.2%
Partido de Innovación Nacional	0.14%
Partido Demócrata Cristiano	0.17%
Frente Amplio Popular en Resistencia	0.1%

Fuente: Tribunal Supremo de Honduras.

6. Población económicamente activa rural y urbana

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, RURAL

*-Miles de personas-
1980-2000*

País	1980	1985	1990	1995	2000
Costa Rica	436	510	583	682	778
El Salvador	786	763	786	877	965
Guatemala	1.138	1.307	1.512	1.775	2.100
Honduras	680	790	909	1.027	1.151
Nicaragua	456	536	601	700	808
Panamá	281	325	368	406	442

Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe 2001. Santiago de Chile, 2001.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, URBANA

*-Miles de personas-
1980-2000*

País	1980	1985	1990	1995	2000
Costa Rica	341	416	527	673	835
El Salvador	721	802	936	1.166	1.445
Guatemala	780	914	1.081	1.304	1.598
Honduras	409	555	745	970	1.258
Nicaragua	481	611	728	890	1.093
Panamá	338	410	493	597	707

Fuente: CEPAL. Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe 2001. Santiago de Chile, 2001.

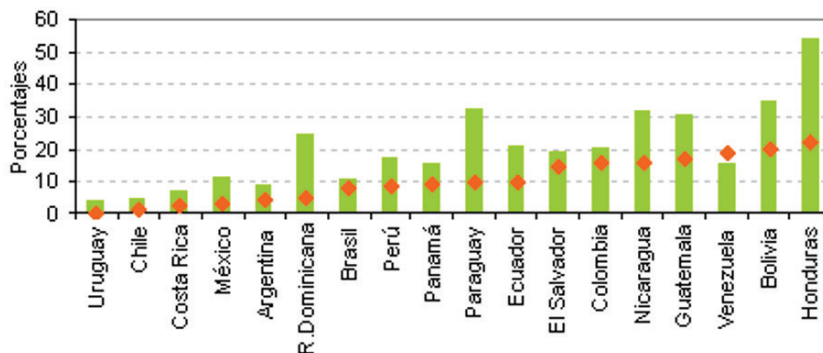
7. Honduras: población económicamente activa por ocupaciones

-Número de personas-
1990-1999

Ocupación	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Administradores y gerentes	25.997	27.567	34.194	38.896	42.743	44.915	51.631	48.834	42.908	56.073
Agricultores	653.516	614.215	619.556	57.635	667.222	703.351	756.083	757.220	763.375	795.432
Comerciantes y vendedores	185.829	194.817	230.132	132.839	232.599	247.464	277.242	319.482	347.246	390.792
Empleados de oficina	45.929	63.433	65.187	50.898	63.015	69.796	82.861	91.947	89.960	97.286
Obreros y jornaleros	101.941	100.970	117.163	47.827	102.090	132.435	143.242	140.435	117.256	131.608
Profesionales y técnicos	94.985	122.133	144.267	97.759	134.982	125.055	130.225	137.013	n.d.	149.877
Obreros de la producción	222.612	234.591	260.778	210.179	337.573	320.831	345.325	359.703	384.620	403.530
Medios de transporte	37.039	40.120	51.505	32.243	51.107	49.819	52.537	63.160	53.476	53.582
Trabajadores de servicios	179.416	194.189	205.817	128.107	194.107	188.316	235.057	240.039	370.834	272.661
Total	1.547.264	1.592.035	1.728.599	796.383	1.825.438	1.881.982	2.074.203	2.157.833	2.169.675	2.350.841

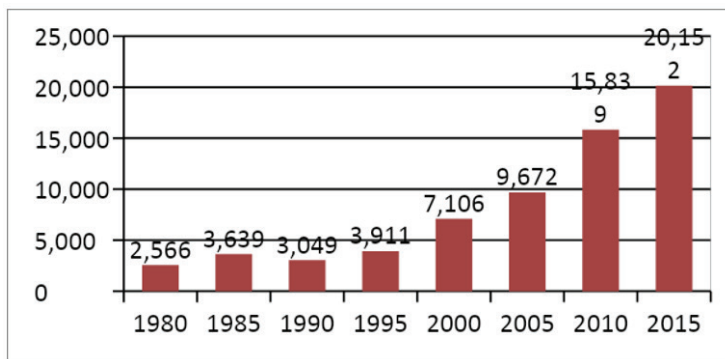
Fuente: Banco de datos del Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL)/OIT-Panamá, 2001.

8. Población en situación de pobreza extrema, Banco Mundial y CEPAL (2015)



Fuente: CEPAL y Banco Mundial.

9. PIB en millones de dólares actualizados 1980 - 2015



Fuente: Banco Mundial

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARANCIBIA, J. (1984). *Honduras: ¿un Estado Nacional?* Tegucigalpa: Editorial Guaymas.
- ASTORGA, M. A. (2017). “La región del Triángulo Norte Centroamericano y el círculo vicioso: violencia, pobreza, migración”. En *Revista conjeturas sociológicas* (enero-abril), págs. 10-30.
- Banco Mundial. (27 de noviembre de 2016). *Honduras*. Banco Mundial. <http://datos.bancomundial.org/pais/honduras>
- _____. (27 de noviembre de 2016). *Honduras: panorama general*. Banco Mundial. <http://www.bancomundial.org/es/country/honduras/overview>
- _____. (27 de noviembre de 2016). *Tasa de población activa, total (% de la población mayor de 15 años) (estimación modelado OIT)*. Banco Mundial. <http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.CACT.ZS?locations=HN>
- _____. (28 de noviembre de 2016). *Inversión extranjera directa, entrada neta del capital (balanza de pagos, US \$ a precios actuales)*. Banco Mundial. <http://datos.bancomundial.org/indicador/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=HN>
- _____. (28 de noviembre de 2016). *PIB (US \$ a precios actuales)*. Banco Mundial. <http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=HN>
- _____. (28 de noviembre de 2017). *Desempleo, total (% de la población activa) (estimación modelo OIT)*. Banco Mundial. <http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS>
- _____. (2 de agosto de 2023). *Crecimiento del PIB (% anual)*. Banco Mundial. <http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=HN>
- BARAHONA, M. (2005). *La historia del siglo XX en Honduras*. Tegucigalpa: Editorial Guaymas.
- BERMUDEZ-MADRIZ, J. L., et. al. (2011). “Sistema de Salud de Honduras”. En *Salud pública de México* 53 (2), págs. 209-219.
- BETHELL, L. (2001). *Historia de América Latina: Vol. 14. América Central desde 1930*. Barcelona: Editorial Crítica.
- BULL, B. (2008). *Globalización, Estado y Privatización. Proceso político de las reformas de telecomunicaciones en Centroamérica*. Costa Rica: FLACSO.
- BUSTELO. (2003). “Desarrollo económico: del Consenso al post Consenso de Washington y más allá”. En *Estudios en honor al profesor Eduardo Bustelo*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

- CANIZALES, R. (2008). “El fenómeno de los movimientos guerrilleros en Honduras: el caso del movimiento popular liberación “cinchonero” En *Estudios* 21, págs. 105-123.
- CASTELLS, M. (2000). “La economía internacional y el proceso de globalización”. En *La era de la información: economía, sociedad y cultura: Vol. 1. La sociedad red*. México: Siglo XXI.
- CASTRO-SUÁREZ, R. (2011). “El golpe en Honduras. Ofensiva conservadora y resistencia”. *Bajo el Volcán* 17. Vol. 11, págs. 43-74.
- COREA, H. R., et. al. (2018). *Situación del Empleo en Honduras 2001-2018*. Tegucigalpa: Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2010) *La inversión directa extranjera en América Latina y el Caribe*. Santiago: CEPAL.
- Constitución Política. (1982). *Constitución Política 1982*. Tegucigalpa: Poder Judicial.
- CRODA, R. (5 de agosto de 2014). *Las 10 familias más influyentes de Centroamérica*. *Forbes México*. <http://www.forbes.com.mx/las-10-familias-mas-influyentes-de-centroamerica/>
- FLACSO. (2002). *Centroamérica en cifras: 1980-2000*. Costa Rica: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- CRUCES, G., et. al. (2017). *Growth, Employment, and Poverty in Latin America*. Oxford: Oxford University Press.
- DE GORI, E. (2014). “Zelaya del golpe a la plaza”. En Esteban de Gori et al. (ed.). *Honduras 2013: golpe de estado, elecciones y tensiones del orden político*. Buenos Aires: Sans Solei Ediciones Argentina.
- ECKSTEIN, D., et. al. (2018). Índice de Riesgo Climático 2019-Resumen. Bonn: Germanwatch.
- ENOCT MÓISES y MAYORQUÍN GARCÍA (2021). “Brigadas Universitarias Durante el Huracán Mitch en 1998”. En *Revista UNAH Sociedad* VI, págs. 6-17.
- EURAQUE, D. (2019). “La configuración histórica de las élites de Honduras ante el golpe de estado del 2009”. En *Anuario de Estudios Centroamericanos*. Vol. 45, págs. 19-48.
- FOUCAULT, M. (2009). *Nacimiento de la biopolítica: curso del College de France (1978-1979)*. Madrid: Akal.
- FLORES, F. M. A. (2009). “La medición censal de la migración en Honduras”. *Notas de población* 88, págs. 245-274.
- _____. (2012). *Factores contextuales de la migración internacional de Honduras*. Tegucigalpa: Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

- _____. (2013). “Migración internacional reciente de Honduras”. *Población y Desarrollo-Argonautas y caminantes* 8, págs. 9-22.
- GARCÍA, D. (1994). *Estado & Sociedad*. Buenos Aires: Norma-FLACSO.
- GARCÍA, J. G. (21 de junio de 2009). *Honduras, un país de cinco familias*. El Mundo. <http://www.elmundo.es/america/2009/11/27/noticias/1259331572.html>
- GARZÓN, D., et. al. (2016). “Violencia estructural en el Triángulo Norte centroamericano”. *Revista Logos, Ciencia & Tecnología* 2. Vol. 7, págs. 105-114.
- HANKE, S. H. (2015). *The World Misery Index: 108 Countries*. Cato Institute. <https://www.cato.org/blog/world-misery-index-108-countries>
- HARVEY, D. (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. España: Akal.
- HERNÁNDEZ, R. A. C. (2020). “La relación migración y Trabajo Social en Honduras”. En *Revista Trabajo Social UNAM* 23-24, págs. 85-100.
- Instituto Nacional de Estadística. (2001). *XVI Censo de población y V de vivienda*. Instituto Nacional de Estadística de Honduras. <https://ccp.ucr.ac.cr/bvp/censos/honduras/2001/boleta.pdf>
- JIMÉNEZ, R. B. (2010). “Honduras: la dictadura de la oligarquía y el movimiento de resistencia popular”. En *Tareas* 17, págs. 31-51 .
- JOHNSTON, J. y LEFEBVRE, S. (2013). *Honduras desde el golpe: Resultados económicos y sociales*. WASHINGTON, DC: Center for Economic and Policy Research.
- KOUZMINE, V. (2001). *América Latina: las exportaciones de productos básicos durante los años noventa*. Santiago: ONU.
- La Prensa. (17 de junio de 2023). *Privatización significaría sacrificar el servicio de Hondutel: Vásquez*. La Prensa. <https://www.laprensa.hn/honduras/privatizacion-significaria-sacrificar-el-servicio-de-hondutel-vasquez-CDLP331322>
- _____. (19 de junio de 2023). *Bancos de capital nacional son los más grandes de Honduras*. La Prensa. <http://www.laprensa.hn/economia/892223-410/bancos-de-capital-nacional-son-los-m%C3%A1s-grandes-de-honduras>
- Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola. (1992). *Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola*. *La Gaceta* 26.713, págs. 1-36.
- LÓPEZ, M. (1999). “La contribución de la Antropología al estudio de los desastres el caso del Huracán Mitch en Honduras y Nicaragua”. *Yaxkin*. Vol. XVIII, págs. 5-18.
- MARTÍNEZ, L. M. (2011). “Neoliberalismo y conflictos socioambientales en Honduras: cuatro casos de estudio: agua, bosque, explotación minera y agricultura”. En *Revista Ciencia y Tecnología* 8, págs. 93-106.

- MARTÍNEZ, Y. (2010). “Organización y demandas del movimiento obrero en Centroamérica: entre el enclave bananero y el proceso de reformas”. En *Clio América* 7, págs. 36-57. <https://umapp002.unimagdalena.edu.co/index.php/cliocamerica/article/view/395/359>
- MEZA, V. (2019). “Los militares hondureños en la hora de Washington”. En Ramón Romero (coord.), *Antología del pensamiento crítico hondureño contemporáneo*. Buenos Aires: CLACSO.
- OCHOA, M. D (2015). *La globalización económica y la desigualdad en el desarrollo geográfico en Honduras 2001-2005*. Buenos Aires: CLACSO.
- Organización de Estados Iberoamericanos y Secretaría de Educación de Honduras (1 de septiembre de 2023). *Contexto social, político y económico*. OEI. <http://www.oei.es/historico/quipu/honduras/>
- Organización de las Naciones Unidas-Habitat. (2012). *Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012. Rumbo a una nueva transición urbana. Brasil: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos*. Brasil: ONU-Habitat.
- Organización de las Naciones Unidas. (31 de agosto de 2023). *Siria, Honduras y Venezuela entre los países con más muertes violentas*. Noticias ONU. <https://news.un.org/es/story/2015/05/1329741>
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). 2014. *Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*. Perú: OIT.
- PALMA HERRERA, J. (2019). “El regreso de los enclaves a Honduras en el siglo XXI. Las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), la versión de las ciudades charter rechazada por su creador Paul Romer (2010-2019)”. En *Anuario de estudios Centroamericanos* 45, págs. 95-132.
- PAVÓN RODRÍGUEZ, L. U y Estrada Arévalo, A. R. (2018). “Caracterización del sistema de salud de Honduras”. En *Revista Médica Hondureña* 86 (1-2), págs. 22-27.
- PUELLO-SOCARRÁS. (2015). “Neoliberalismo, antineoliberalismo, nuevo neoliberalismo. Episodios y trayectorias económicas políticas suramericanas (1973-2015)”. En Luis Rojas (coord.), *Neoliberalismo en América Latina, crisis, tendencias y alternativas*. Asunción: CLACSO.
- RAMÍREZ. I. (2013). “¿Qué pasa en Honduras?”. En *Revista Divergencia* 2, págs. 133-156.
- ROMERO, J. (2010). *Los conflictos armados de Centroamérica*. Madrid: Ministerio de Defensa.

- SALAS, C. (2003). “Trayectorias laborales entre el empleo, el desempleo y las microunidades en México”. En *Papeles de población* 38, págs. 121-157.
- SERNA, B. (2007). *Honduras: tendencias, desafíos y temas estratégicos del desarrollo agropecuario*. México, D.F: CEPAL.
- _____. (2016). *Honduras: políticas de ajuste, inequidad y crecimiento 1980-2013*. Kioto: The Center of Integrated Area Studies, Kyoto University.
- SOSA IGLESIAS, J. E. (2014). “Honduras: entre criminalidad, enfrentamiento mediático, protesta social y resultados electorales cuestionados”. En *Revista de Ciencia Política* 1 (34), págs. 203-219.
- _____. (2015). *Democracia, procesos electorales y movimientos sociales en Honduras: de la transición política al golpe de Estado*. Buenos Aires: CLACSO.
- _____. (2016). “Democracia, procesos electorales y movimientos sociales en Honduras: De la transición política al golpe de Estado”. En *Revista Crítica y Emancipación* 15. Vol. VIII. <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/18/184010/html/index.html>
- _____. (2019). “Transformación en las élites económicas, Estado y el proceso de democratización y desdemocratización: el caso de Honduras, 1990-2017”. En Ramón Romero (coord.), *Antología del pensamiento crítico hondureño contemporáneo*. Buenos Aires: CLACSO.
- Subgerencia de Estudios Económicos. (2004). *Inversión extranjera directa en Honduras. Periodo: 1993-2003*. Tegucigalpa: Banco Central de Honduras.
- SVAMPA, M. (2013). “Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina”. En *Nueva Sociedad* 244, págs. 30-46.
- TÁBORA, M. R. (2007). *Competencia y regulación en la banca: el caso de Honduras*. México: ONU-CEPAL.
- TORRES-CALDERÓN, et.al. (2002). “Descifrando a Honduras. Cuatro puntos de vista sobre la realidad política tras el huracán Mitch”. En *Hemisphere Initiatives*, 7-18. Massachusetts: Cambridge University.
- TORRES-RIVAS, E. (2007). “¿Qué democracias emergen de una guerra civil?”. En Waldo Ansaldi (dir.), *La democracia en América Latina. Un barco a la deriva*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- VELÁSQUEZA, B. (16 de febrero de 2014). *Advierten sobre APP para hidroeléctricas*. La Prensa. <http://www.laprensa.hn/economia/laeconomia/476040-97/advierten-sobre-app-para-hidroelectricas>